

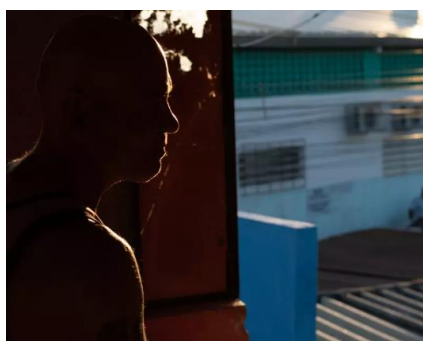


Sin hogar y apátridas: los deportados de Estados Unidos se encuentran atrapados en México

By Kate Linthicum

Staff Writer

Photography by Alejandro Cegarra



- Bajo el mandato de Trump, se ha deportado a México a cerca de 13 000 ciudadanos de terceros países, muchos de ellos sin ningún vínculo con ese país.
- El grupo más numeroso de estos deportados lo constituyen los inmigrantes procedentes de Cuba.
- Expulsados de Estados Unidos, indocumentados en México e incapaces de regresar a su país, los deportados se encuentran atrapados en «un limbo de cuasi apatridia».

Eran las 2 de la madrugada cuando un autobús que transportaba a decenas de deportados estadounidenses llegó a esta sofocante ciudad del sur de México.

Los agentes de inmigración mexicanos que habían escoltado al grupo durante su viaje de tres días desde la frontera dijeron que sus protegidos, aún vestidos con el uniforme carcelario de los detenidos, ya eran libres de marcharse.

Alberto Rodríguez, de 73 años, cojeaba con un bastón por una calle industrial desierta. Un derrame cerebral le había dejado en un estado de confusión permanente, incapaz de recordar muchos detalles de su vida más allá del hecho de que había nacido en Cuba y había pasado casi 50 años en Estados Unidos.



«¿Dónde estoy?», gritó.

«Villahermosa», respondió alguien.

Al igual que la mayoría de los demás, Rodríguez nunca había pisado México y nunca había oído hablar de esa ciudad de un millón de habitantes rodeada de una densa selva. Los deportados deambularon en la oscuridad hasta que encontraron un parque, donde Rodríguez pasó la primera de lo que serían muchas noches acurrucado en el suelo, intentando dormir.

Como parte de su amplia campaña de represión contra la inmigración, el presidente Trump ha enviado a personas deportadas a países que no son sus países de origen, entre ellos Ruanda, El Salvador y Sudán del Sur.

Pero, con diferencia, el mayor número de personas deportadas a terceros países está siendo enviado discretamente a México, donde son trasladadas rápidamente en autobús a ciudades más pequeñas situadas a miles de kilómetros al sur de la frontera estadounidense.

Algunos son luego devueltos a sus países de origen —incluidas, en algunos casos, personas que han demostrado que allí se enfrentan a una posible persecución—. Otros languidecen en México con escasos recursos y sin perspectivas claras de obtener un estatus legal bajo la legislación mexicana.

México acogió a casi 13 000 personas no mexicanas deportadas durante los primeros 11 meses del segundo mandato de Trump, entre ellas personas procedentes de Venezuela, Haití y Nicaragua, según datos del Gobierno mexicano.

El grupo más numeroso estaba formado por inmigrantes procedentes de Cuba, cuyo gobierno comunista se niega en ocasiones a readmitir a los deportados de Estados Unidos, especialmente a aquellos con antecedentes penales.

Expulsados de Estados Unidos, indocumentados en México e incapaces de regresar a su país, los deportados se encuentran atrapados en «un limbo de cuasi apatridia», según un informe reciente de la organización Refugees International.

Yael Schacher, una de las autoras del informe, calificó la decisión de México de enviar a los migrantes a ciudades como Villahermosa, a pocas horas de



la frontera con Guatemala, como un intento de mantenerlos «fuera de la vista».

Villahermosa carece de servicios adecuados, ya que solo cuenta con un centro de acogida para migrantes y no hay ninguna oficina de la agencia federal que tramita las solicitudes de asilo.

La ciudad se ve envuelta en un violento conflicto entre bandas de narcotraficantes. Según los datos del censo, nueve de cada diez residentes afirman que su ciudad no es segura, una proporción superior a la de cualquier otro municipio de México.

«Están dejando en un lugar peligroso a personas que son extremadamente vulnerables», afirmó Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en Migración, una organización sin ánimo de lucro.

Durante décadas, México ha sido un país de tránsito para los migrantes, en su mayoría jóvenes y familias que se dirigen a Estados Unidos.

Los nuevos deportados a México presentan un perfil muy diferente.

Muchos eran residentes de larga duración en Estados Unidos que habían entrado en el país hacía años, a menudo de forma legal. A algunos se les había concedido la posibilidad de quedarse tras demostrar ante los jueces de inmigración que probablemente serían perseguidos si regresaban a su país de origen.

Muchos de los cubanos expulsados a México perdieron su condición de refugiados hace décadas tras cometer delitos, pero se les permitió permanecer en Estados Unidos con órdenes de deportación sin ejecutar porque el Gobierno cubano se negaba a readmitirlos.

No fue hasta la llegada de Trump cuando se decidió expulsar a estos migrantes.

Entre ellos se encuentra Rodríguez, quien, según los registros judiciales, fue condenado por robo en 1990.

Rodríguez, de complexión delgada y barba blanca, pasa los días sentado a la sombra de un árbol frente al Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito, un pequeño refugio católico enclavado entre desguaces y talleres mecánicos.



Es uno de los muchos cubanos de edad avanzada con problemas de salud deportados en los últimos meses, según los trabajadores humanitarios.

El residente de más edad del centro de acogida es un hombre de 83 años que pasó la mayor parte de su vida trabajando en Florida antes de que lo detuvieran y lo enviaran a un centro de detención conocido como «Alligator Alcatraz».

Muchos están enfermos, como Ricardo Pérez, de 67 años, quien contó que los agentes de inmigración lo empujaron en silla de ruedas a través de la frontera de Estados Unidos, o Luis René Lemus, de 59 años, que padece Parkinson y esquizofrenia y ha tenido dificultades para conseguir la medicación que necesita en México.

Ricardo del Pino, de 67 años, estaba gravemente enfermo cuando llegó al centro de acogida el verano pasado, según Josué Martínez Leal, uno de sus directores. Del Pino falleció de cáncer unos meses después.

Martínez mandó incinerar el cuerpo del hombre y guardó las cenizas en un nicho de madera de la pequeña capilla del albergue.

Le indigna que Estados Unidos esté deportando a personas que son tan claramente vulnerables y que México no esté haciendo más por atenderlas.

«Los están enviando aquí a morir», afirmó Martínez.

Rodríguez, que pasa muchas noches durmiendo frente a un hospital público a pocas manzanas del albergue, dijo que se siente tan desesperado que está pensando en quitarse la vida.

«¿Sinceramente?», dijo. «Solo estoy buscando una pistola».

«No, no, no», intervino José Alejandro Aponte Delgado, de 53 años. Rodeó con el brazo a su amigo.

«A veces me he sentido igual», dijo Aponte. «Las cosas van a mejorar, hermano. Tienen que mejorar».

Sin embargo, no se vislumbra ningún alivio.

Los severos recortes en la ayuda exterior por parte del Gobierno de Trump han reducido en gran medida la capacidad de México para atender a los migrantes.



El año pasado, la administración recortó 2000 millones de dólares de la ayuda anual de EE. UU. destinada a América Latina y el Caribe, lo que obligó a los refugios sin ánimo de lucro, a los proveedores de asistencia jurídica y a otras entidades que trabajan con migrantes a despedir personal o a suspender por completo sus operaciones. Martínez dijo que se vio obligado a despedir al médico, al psicólogo y al trabajador social del refugio.

La congelación también ha provocado recortes de personal en la agencia mexicana para los refugiados, que se financiaba indirectamente con fondos estadounidenses canalizados a través de las Naciones Unidas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que, a diferencia de otros países que acogen a personas deportadas de terceros países, su nación no ha firmado ningún acuerdo formal para acoger a inmigrantes procedentes de Estados Unidos. Según ella, las personas que su país ha acogido hasta ahora lo han sido por razones «humanitarias».

Andrés Ramírez, quien ocupó el cargo de director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados bajo el mandato del predecesor de Sheinbaum, afirmó que México se encuentra bajo presión para complacer a Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si Sheinbaum no cumple con sus deseos en materia de inmigración y otros asuntos.

Pero podría hacer más para ayudar a los deportados a obtener protección como refugiados, agilizando el proceso actual, que lleva meses, afirmó. «Si realmente se actuara por motivos humanitarios, es de suponer que se aplicaría una política mucho más humana con respecto a estas personas».

Los defensores de los derechos humanos afirman que las autoridades mexicanas rara vez informan a las personas deportadas de su derecho a solicitar asilo en el país. También señalan que México ha violado claramente el principio de «no devolución», según el cual los gobiernos no deben enviar a las personas a lugares donde puedan sufrir persecución.

Kuhner dijo que su organización está en contacto con una mujer transgénero nacida en Honduras que demostró ante un tribunal estadounidense que corría peligro si regresaba a su país de origen debido a su identidad de género. Pero tras ser deportada, México la envió a



Honduras. Para evitar ser perseguida, ha empezado a vestirse como un hombre, dijo Kuhner.

Refugees International documentó el caso de un hombre salvadoreño que había obtenido protección contra la deportación a su país de origen en virtud de la Convención contra la Tortura. Estados Unidos lo envió a México, país que finalmente colaboró en su repatriación a El Salvador, donde posteriormente fue encarcelado en la prisión más infame del país.

Un tribunal de apelación permitió esta semana a la administración Trump seguir deportando a inmigrantes a países distintos de sus países de origen. El año pasado, envió a un migrante cubano a más de 16 000 kilómetros de distancia, al reino africano de Eswatini.

Eso significa que es probable que lleguen más autobuses a Villahermosa, dejando allí a los deportados aún vestidos con los chándales de la prisión.

Personas como Mauricio De León, de 50 años, que nació en Guatemala y fue llevado por su madre a Estados Unidos cuando tenía un año. Ella perdió la custodia de él y creció en el sistema de acogida en Long Beach.

A De León se le dictó una orden de deportación en 2007 tras cumplir una condena de prisión por tráfico de drogas. Fue deportado el año pasado. México intentó enviarlo a Guatemala, pero Guatemala afirmó que no tenía constancia de su existencia. Por lo tanto, se encuentra prácticamente apátrida y sobrevive gracias a los ahorros que acumuló como camionero en California.

Alquila un pequeño apartamento en una azotea, que comparte con otros deportados de su misma edad o mayores.

Pasan los días fumando cigarrillos, viendo películas y recordando su vida en Estados Unidos.

«Echo de menos las hamburguesas», dijo De León.

«Echo de menos la pizza», dijo Miguel Martínez Cruz, de 65 años, un deportado cubano que es ciego de un ojo.

«Echo de menos la playa», dijo De León.

No tienen agua caliente. No hay perspectivas de trabajo. «Es el mismo mal día una y otra vez», dijo.



Lázara Santana, de 57 años, emigró a Estados Unidos desde Cuba cuando tenía 11 años.

Hace veinte años perdió su condición de refugiada por vender drogas. Según cuenta, su único hijo es un marine que ha participado en varias misiones en Afganistán y votó a Trump.

Durante dos décadas, acudió cada año a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para informar sobre su libertad condicional. Este otoño, la detuvieron.

Según cuenta, los funcionarios de inmigración le dieron a elegir dónde ser deportada: «Puedes ir al Congo o a México».

Duerme en una habitación compartida que alquila con el dinero que le envía su pareja desde Estados Unidos. No ha solicitado el estatuto de refugiada en México. Dice que tiene miedo de salir de casa.

«Me acuesto llorando y me despierto llorando», dijo. «Esto parece una pesadilla de la que no puedo despertar».

[Trump is deporting thousands of Cubans and other migrants to Mexico - Los Angeles Times](#)